

México: una izquierda mercurial

RICARDO RAPHAEL

Centro de Investigación y Docencia Económicas, México

Qué difícil tarea es definir algo que por su naturaleza no posee una definición. ¿Cómo describir las propiedades de un cuerpo sólido que simultáneamente pretende ser gaseoso? ¿Cómo se pueden trazar los contornos conceptuales de un ser vivo que tiene aspiraciones de ser vegetal y animal a la vez? ¿Qué palabras usar para capturar su ambigüedad? Por lo general las indefiniciones llevan a inventar nuevas categorías, conceptos a modo para caracterizar lo que no cabe en clasificaciones más ortodoxas. Algo así ha sido necesario hacer en este texto que tiene como propósito definir a la izquierda mexicana. Lo ingrato es caracterizarle cuando sus ideas y sus prácticas tienen el don de la ubicuidad: pertenecen al territorio de los principios democráticos y a la vez están fuertemente visitadas por los valores revolucionarios. La izquierda mexicana tiene como principal defecto que no le gusta perderse ningún tren. Por partida doble quiere ser pacífica y rebelde a la vez, radical y moderada, pausada y vertiginosa, revoltosa y tolerante. Apela unas veces a la aceleración impetuosa de las partículas y otras a su transformación aburrida e incremental. Todo en una misma presentación y usando el mismo envase. Si fuese necesario jibarizarle se descubriría que la izquierda mexicana posee como la más constante de sus características a la mercurialidad. Sirva como evidencia empírica de este hecho el nombre de los dos partidos más grandes que en México se encuentran afiliados a la Internacional Socialista: uno se llama Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el otro Partido de la Revolución Democrática (PRD). No se necesita ser un semiólogo consumado para corroborar que, desde la nomenclatura, se perfila ya el problema vinculado a las definiciones de la izquierda mexicana.

Por principio es necesario advertir que en México, como en tantas otras geografías políticas del mundo, para explorar la naturaleza de la izquierda es necesario utilizar el plural. Por un lado, en este país ha habido una izquierda gobernante y por lo tanto oficial, aglutinada alrededor del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Por el otro, es posible seguirle la pista a un amplio archipiélago de izquierdas no priistas que hicieron un muy largo trayecto para obtener, primero, identidad propia, y después un respaldo social lo suficientemente denso como para hacer que su acción política fuese tomada en serio. Sobre este archipiélago se fundó Partido de la Revolución Democrática (PRD). Teniendo como objeto de estudio a una miríada de organizaciones políticas resulta de legítima precaución preguntarse si todas ellas pueden ser sinceramente definidas como de izquierda. El presente texto podría enfrentar, por ejemplo, la crítica de quienes consideran que el PRI no

tendría por qué ser incluido en esta lista. Este tipo de evaluación sobre el grado de pureza de las organizaciones de izquierda (y también sobre las personas que les integran) ha sido muy común. Litros de tinta se han derramado para trazar las fronteras que circundan el mapa de la izquierda, y más todavía, para subrayar las diferencias entre sus distintas expresiones. En todo el mundo, durante el siglo XX —por razones generalmente vinculadas a la pugna entre facciones políticas— pareció de extrema necesidad mostrar las abismales distinciones que supuestamente diferenciaban, por ejemplo, a la izquierda comunista de la trotskista, o al socialismo real de la socialdemocracia, o al maoísmo del resto del paraje fundado en el marxismo. En cada uno de estos ejercicios intelectuales se optó por analizar al objeto con respecto a sus valores. El propósito era mensurar la distancia existente entre la izquierda deseable y la izquierda real. Incontables textos se escribieron con esta encomienda en la antigua Unión Soviética, en los países de Europa del Este, en Cuba y muy notoriamente en la China comunista. Apreciándoles en todo lo que puedan valer, los estudios que han seguido este método han servido mejor para calificar políticamente a los enemigos que para desentrañar la naturaleza de la izquierda. Con más frecuencia de la que era necesaria todas esas plumas han terminado siendo censoras o evaluadoras de la pureza de los ideales políticos, en lugar de ser edificadoras de una reflexión constructiva y dinámicamente positiva de la izquierda. Es por tal motivo que en este texto se ha renunciado explícitamente a recurrir al método prescriptivo. No es objeto de las líneas que siguen el ofrecimiento de una ponderación ético-normativa para que el lector sea capaz de distinguir, en México, entre la izquierda deseable y la izquierda real, o entre sus valores más sublimes y sus prácticas más reprochables.

Una dificultad sería se presenta, sin embargo, cuando se abandona la ruta prescriptiva: ¿si la naturaleza del objeto de estudio no se define a partir de sus valores, entonces cómo es posible saber cuándo se está en presencia de algo que puede ser clasificado como poseedor de tal naturaleza? O para el caso de interés: ¿si se renuncia a definir a una expresión social o política por sus valores, cómo saber que se está en presencia de una instancia cuya naturaleza puede ser adjetivada como de izquierda? La única respuesta posible a esta interrogante resulta ser auto-referencial: se ha de considerar como de izquierda a toda aquella expresión intelectual u organizativa que así se declare. Es decir, que toda la definición dependería de un acto voluntario, conciente y plebiscitario del agrupamiento humano en cuestión. Y a partir de este sólo hecho se vuelve posible estudiar su respectiva naturaleza. Bajo este criterio, el PRI puede ser considerado, como un partido de izquierda en la medida en que, durante distintos periodos de su historia, así le han definido sus propios militantes.

A partir de esta convicción con respecto a las definiciones, en este trabajo de reflexión se optó por llevar a acabo una aproximación que, sobrevolando algunos episodios de la historia, se centra en tres coordenadas: 1) la consistencia en el tiempo de los principales planteamientos de la izquierda mexicana; 2) la compati-

bilidad coyuntural que los diversos mensajes políticos ofertados poseen entre sí y; 3) la correspondencia entre la propia autodefinición de las izquierdas y la imagen proyectada hacia el exterior. ¿Por qué la importancia de la consistencia? ¿Qué caso tiene valorar a la izquierda en función de este criterio? ¿No lleva obligadamente éste valor hacia un análisis prescriptivo? A estas interrogantes es conveniente responder que la consistencia, independientemente de que pueda ser considerado como un elemento ético-normativo, es tomada en cuenta aquí como una cuestión de elemental sobrevivencia para cualquier organización humana que busque interactuar en un contexto de pluralidad. Un argumento que demuestra tal afirmación lo otorgan las instituciones partidarias. Entre otras tareas, en una democracia los partidos políticos sirven para descifrar la información que las personas reciben cuando se enfrentan ante la inmensidad de lo político. Filtran principios, vuelven nítidas las opciones, aclaran las filias y también las fobias, anticipan los pros y los contras, condensan los argumentos para estar de acuerdo y también las razones para el rechazo. Suelen ser referentes serios y fundamentales de un complejo mapa donde los seres humanos hemos de lidiar con el desciframiento de la realidad política. Es precisamente de esta manera como la existencia de partidos colocados en uno u otro extremo del espectro ideológico sirve para reducir una enorme cantidad de costos informativos que, de otra manera, se volverían impagables para las personas. De tal premisa se desprende otra de igual importancia: en la medida en que, dentro de un sistema democrático, una organización con pretensiones políticas confunde por la ambigua información que transmite, es muy probable que ésta termine enfrentando el repudio de sus actuales o potenciales seguidores. En sentido inverso, la nitidez en la información que comunique habrá de ofrecerle una gran ventaja competitiva. Siguiendo esta premisa, en este texto se ha buscado detectar las inconsistencias internas de las expresiones de izquierda, así como las incongruencias entre las definiciones que las organizaciones han adoptado y la imagen real que ellas proyectan. Cabe insistir en que la clave de este análisis surge de la hipótesis que advierte como ventaja competitiva la capacidad que toda organización política posea, en un contexto de pluralidad, para reducir los costos de información que recaen sobre los ciudadanos.¹ A este respecto es necesario subrayar que —en una democracia— la ambigüedad tiende a ser un poderoso disruptor de las lealtades que posee una organización política, y por tanto, en toda racionalidad la organización política habría de buscar disminuir las contradicciones de su identidad, si lo que quiere es permanecer en el tiempo. Ahora bien, si la incongruencia o inconsistencia son desventajas para interactuar y competir en el espacio público, ¿por qué el PRI pudo sobrevivir tanto tiempo con sus muchas y variadas ambivalencias? La respuesta a esta interrogante tiene que ver con el grado de pluralidad que durante la mayor parte del siglo XX se reflejó en el espacio público mexicano. Precisamente porque México no vivía en un régimen democrático es que la ambigüedad pudo ser una característica de la izquierda mexicana. Todavía más, en el caso del PRI es posible afirmar que en mucho le ayudó su naturaleza

ambivalente para prolongar la hegemonía que durante tantas décadas sostuvo sobre el sistema político mexicano. Entre otros elementos, fue por su indefinición que esta fuerza política pudo mediatizar, discursiva y materialmente, a sus potenciales rivales. Dos fueron las coordenadas tradicionales de la ambigüedad priísta: por una parte, para con la democracia, y por la otra, para con su ideología. Si hoy se revisan los libros de texto utilizados por el sistema de educación pública del régimen priísta, todavía sorprende la defensa que dentro de ellos se hacía de los valores, las libertades, los procedimientos y las prácticas de la democracia. En efecto, al pasar de las generaciones las y los mexicanos fueron educados para vivir en democracia. Y sin embargo, por medio de un complejo entramado de principios y valoraciones también asimiladas por la sociedad, el régimen priísta logró obtener la tácita legitimación de su autoritarismo. Luego, el doble mensaje pregonado por el discurso se materializó en una práctica igualmente ambigua. Mientras duró, este régimen celebró miles de comicios para elegir presidentes municipales, legisladores locales, gobernadores, representantes federales para la Cámara de Diputados y de Senadores y, desde luego, para la presidencia de la República. Y sin embargo, por extraordinario que parezca, hasta finales de los años ochenta el PRI logró conservar en su poder aproximadamente el 91 % de los cargos de elección popular. A diferencia de muchos otros sistemas autoritarios, en México había elecciones periódicas cuyo particular y único defecto es que no eran democráticas.

La otra ambigüedad que caracterizó al viejo régimen fueron sus dobleces ideológicos. Es muy probable que también gracias a ellos el PRI haya podido asegurarse continuidad. Se trataba de una maquinaria partidaria supuestamente anclada en la izquierda pero que en realidad tenía un margen de maniobra ideológicamente ilimitado para el ejercicio de sus acciones de gobierno. De ahí que en la memoria de este mismo partido puedan encontrarse políticas tan diferenciadas como la estatización del petróleo, la reforma agraria, la representación casi unánime del movimiento sindical mexicano, y también, la política de integración comercial con los Estados Unidos, el desmantelamiento de los programas de subsidio alimentario o el fomento a las prácticas oligopólicas privadas en sectores clave para la economía. La evidencia de tal contradicción ideológica en el PRI es todavía más notoria si se miran de cerca a sus principales liderazgos. Han convivido en él socialistas convencidos y legitimados por los valores del movimiento revolucionario y neoliberales ortodoxos educados en las aulas de las escuelas económicas más conservadoras del mundo. En efecto, hasta hace muy poco el PRI era una suerte de casa abierta al público, tolerante con todo aquel que cumpliera con la promesa de no defecionar de sus filas. No es por tanto exagerado argumentar que esa amalgama tan variopinta —de prácticas y principios, de ideas e ideologías, de orígenes y de visiones— sólo pudo sostenerse en pie gracias a que vivía en un régimen donde la oposición era casi inexistente. Y por tanto, tampoco lo es decir que, cuando la indefinición dejó de ser sostenible —porque el contexto se volvió plural y democrático, y porque derivado de este hecho, las nuevas generaciones ya

no se sintieron tan cómodas al probarse un traje con tantos pliegues y texturas— el PRI comenzó a mostrar síntomas de agotamiento.

Algunas de las más peculiares contradicciones de este partido fueron compartidas por las fuerzas de la izquierda mexicana. Otras se han ido resolviendo con el tiempo, transformando a su vez al conjunto del espectro político. Para explorar la naturaleza de la izquierda mexicana resulta pertinente revisar algunos de los cambios que han operado en las identidades de las diversas formaciones que se reconocen como parte de dicha corriente política. Ello con el objeto de hacer resaltar tanto sus consistencias como sus contradicciones. En este texto, las escisiones priístas ocurridas hacia finales de los años ochenta han sido valoradas como la gran clave que explica a la naturaleza contemporánea de la izquierda mexicana. El surgimiento del Frente Democrático Nacional (FDN) pareciera ser uno de los capítulos más destacados de un proceso de búsqueda en las definiciones. Luego, derivado de aquel, el nacimiento del PRD confrontó seriamente la identidad y los valores del archipiélago progresista. Y más tarde, la construcción de los procedimientos y las normas de la democracia, pero sobre todo, de la lealtad hacia las prácticas y los valores de este régimen político, han continuado exigiendo reformas a su identidad. La tesis central de este texto es que, en una primera etapa, la emergencia del movimiento neocardenista obligó a que la izquierda mexicana despejara varias de sus ambigüedades ideológicas. Sin embargo, aún le queda pendiente a esta corriente política resolver sus ambivalencias y contradicciones para con la legalidad y la ética de la democracia.

En las siguientes líneas se explorarán algunas de las vinculaciones históricas entre las dos grandes corrientes que en México se han reivindicado como de izquierda. Es importante decir aquí que la extensión del presente texto ha vuelto materialmente imposible celebrar un análisis sobre todas las izquierdas mexicanas. De ahí que se haya optado por centrar los esfuerzos en las dos expresiones que en el presente poseen el mayor respaldo electoral: el PRI y el PRD. Queda entonces para futuros ejercicios de reflexión, el análisis del resto de las fuerzas políticas partidarias y también de las demás organizaciones sociales que se reconocen como de izquierda, incluidas aquellas de corte guerrillero como lo son el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), afincado en el estado de Chiapas, o el Ejército Popular Revolucionario (EPR), cuya base social estaría en los estados de Guerrero y de Oaxaca. También por cuestiones de espacio se tomó la decisión de focalizar el análisis sobre pocos episodios puntuales de la historia política de México. No obstante, todos ellos pueden ser apreciados como intervalos esenciales ya que durante ellos la izquierda experimentó severos momentos de crisis. Un primer intervalo que se ha considerado como relevante fue la transición que vivió el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y que le llevó a convertirse en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Un segundo momento elegido aquí fue el que se ubica durante la década de los años setenta en que, tanto el PRI como las izquierdas de aquella época, tuvieron que hacer frente a las repercusiones del malo-

grado movimiento de 1968. La tercera estampa considerada para este análisis ocurre a finales de la década de los ochenta cuando, desde adentro de las filas del PRI, surgiera el Frente Democrático Nacional (FDN). Instancia que poco tiempo después se convertirá, junto con otras fuerzas, en fundadora del PRD. Finalmente, el último episodio a considerar será la elección del año pasado (julio de 2006), cuando los frustrantes resultados en las urnas emplazaron a la izquierda mexicana para que se definiera frente a los procedimientos, los términos y las legalidades de la estrenada democracia mexicana. Como ya se anunció anteriormente, las dos contradicciones a explorar en este texto, y por lo tanto a través de los cuatro episodios arriba anotados, son las relativas al carácter ideológico y al sello democrático de las izquierdas mexicanas.

El PRI como respuesta a las primeras contradicciones

El Partido de la Revolución Mexicana (PRM) fue el resultado de la mayor alianza político-social que se haya visto en México. Como su antecesor inmediato, el Partido Nacional Revolucionario (PNR), incorporaba a los militares, a los políticos profesionales y a la burocracia. Pero además tuvo la capacidad de aglutinar en él a las grandes organizaciones obreras y campesinas, también herederas del movimiento revolucionario. Sin lugar a dudas, el anclaje ideológico de este partido estuvo a la izquierda. Dos fueron los eslabones que mantuvieron a tantos actores y fuerzas sociales cohesionados entre 1938 y 1946. Por una parte, la segunda guerra se convirtió en una poderosa razón para evitar las disidencias. En los hechos, el PRM no enfrentó oposición real debido al discurso de unidad anti-fascista que la élite política de aquella época logró construir para atemperar los riesgos provenientes de la conflagración mundial. Por el otro lado, ese discurso de unidad también se sostuvo gracias a la convicción de privilegiar la alianza con las emergentes fuerzas proletarias.² Sin embargo, para 1946 el PRM se volvió una víctima de su propio éxito. El fin de la segunda guerra mundial eliminó varias de las razones que dieron origen a esa versión del partido de Estado. La transición que experimentó el PRM es la de un frente amplio que redujo su volumen en varias tallas. Esta evolución implicó la renuncia a una parte de las ideas que le dieron origen y provocó también el desprendimiento de varios actores que, bajo el arreglo político anterior, le prodigaron apoyo. Todavía bajo las siglas PRM, el presidente Manuel Ávila Camacho empujó la decisión para que el sector corporativo integrado por los militares rompiera filas dentro de ese partido. Luego, el lanzamiento de un político civil, Miguel Alemán, como candidato a la presidencia de la República, confirmó que la era de los revolucionarios —que además fungían como militares— había terminado. Sumadas a este conjunto de decisiones, vinieron otras de igual trascendencia. El término que les adjetiva a todas ellas es el de «institucionalización». Hacia finales de la década de los cuarenta el gran objetivo del régimen fue

despersonalizar los procesos políticos: hacerlos depender menos de los individuos y más de los procedimientos legales. Como signo vigorosamente emblemático de esta voluntad ocurrió el cambio de apellido en el partido de la Revolución. El apellido «Institucional» apareció como una necesidad de bautizar al conjunto de cambios que estaban ocurriendo. Ahora se trataba de hacer pasar a la revolución por el tamiz de la regularidad, de la incrementalidad y también de la legalidad. De civilizar la política en las dos acepciones de la palabra: conducirla por mediación de los civiles y gobernarla de manera ordenada y pacífica.

Se trató de una redefinición que generó amplias consecuencias. Si bien el PRI no renunció a las causas revolucionarias, con esta reencarnación buscó establecer una vía sin contradicciones para promoverlas. Ello tuvo implicaciones inmediatas en el plano ideológico. Mediatizada la revolución, el objetivo del régimen ya no era llevar a los proletarios al poder, como ocurriera durante el cardenismo, sino conseguir la justicia social; un propósito más genérico. Y en el centro de esta preocupación se prefirió ver a un actor pluriclasista y ya no sólo a la clase trabajadora. En alguna medida, el alejamiento de Vicente Lombardo Toledano con respecto al nuevo Partido Revolucionario Institucional es un hecho coincidente con este fuerte reacomodo de las fuerzas políticas. También lo es la fundación del Partido Popular (luego Partido Popular Socialista) encabezado por este carismático líder de la izquierda. Junto con este episodio, también es necesario tomar nota de la marginación política a la que fue sometido el Partido Comunista Mexicano (PCM). El nuevo contexto de la posguerra —caracterizado por la distancia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética— llevó a que esta incipiente fuerza política fuera excluida del nuevo arreglo en las estructuras de poder.

Todos estos elementos conducen a concluir que la disolución del PRM y la creación del PRI provocaron que el partido de Estado dejara de ser una fuerza de izquierda con aspiraciones socialistas para convertirse en una formación progresista que reflejaba, sobre todo, las aspiraciones de la pequeña burguesía ascendente de la era post revolucionaria. Un elemento interesante de este aburguesamiento del partido de Estado fue la adopción, en la original declaración de principios del PRI, de una serie de preceptos claramente anclados en la definición de democracia liberal:

(El PRI) declara que los ideales de la Revolución mexicana han ido cristalizándose en instituciones que forman ya parte integrante de la vida nacional... y que tales instituciones deben mantenerse y perfeccionarse: la libertad de expresión y pensamiento, la libertad de asociación, la libertad de creencias y las libertades política y económica.

Claro está que esos principios liberales convivían en el mismo párrafo con la defensa de otros más inclinados hacia la cuestión social:

[...] el ejido, el derecho a la sindicalización, el derecho a la contratación colectiva, el derecho de huelga, el seguro social, el derecho de la nación a la propiedad y explotación del subsuelo y el derecho del Estado a dirigir la educación pública.

Si fuese forzoso tratar de definir ideológicamente al PRI de 1946, probablemente el mejor término sería el del «liberalismo social»: un ayuntamiento de valores sociales provenientes de la época del cardenismo con valores liberales retomados del siglo XIX y reforzados por el nuevo paradigma democrático mundial de la posguerra. Es necesario destacar aquí que, durante un breve momento, el costado liberal de este partido llevó a que también se promovieran mecanismos de elección directa dentro de sus filas. A diferencia de los procedimientos previos utilizados por el PRM —donde eran los sectores corporativos quienes, a partir de cuotas, conformaban a la representación nacional— en sus albores el PRI pretendió reformar las cosas para que fueran los militantes, y no los liderazgos de la cúpula, quienes eligieran a sus representantes. Sin embargo, esta aspiración inscrita en los estatutos de este partido no llegó muy lejos. Pronto se echó reversa y el derecho a ser votado de los priístas de base se mantuvo expropiado y en las manos de unos cuantos. En resumen, con respecto al tema ideológico es evidente que el fin de la segunda guerra obligó al partido de Estado a enfrentar una serie de redefiniciones que terminaron alejándolo de las aspiraciones socialistas heredadas por el cardenismo. En su lugar se instaló una ideología muy cercana al liberalismo social. Por otra parte, se adoptaron una serie de principios netamente democráticos como la institucionalización de la política y de su toma de decisiones, el respeto a las libertades básicas (pensamiento, expresión, organización etcétera) y se intentó —sin éxito— garantizar los derechos del militante a votar y ser votado dentro de las filas del PRI. Fue con este arreglo compuesto por las nuevas definiciones identitarias y los procesos que de ellas se derivaron, que este partido logró navegar establemente entre 1946 y 1968. Es posible afirmar que, si bien el PRI resolvió por un tiempo la contradicción ideológica latente en el PRM, este partido también dejó pendiente para otro momento la discusión relativa a sus contradicciones democráticas.

El 68 y la identidad de la izquierda mexicana

El crecimiento de las expresiones de izquierda no priísta durante las décadas de los cincuenta y los sesenta fue marginal. El Partido Popular Socialista (PPS), fundado por Lombardo Toledano, inauguró la ruta acomodaticia que muchas de las oposiciones mexicanas decidieron seguir después. En efecto, contrario a lo que se hubiese pensado en un principio, el PPS pronto se volvió cómplice del régimen. A esta tradición obsecuente y plegada a los intereses del PRI se sumó, desde entonces, alguna buena parte de la izquierda. Una excepción notable fue el Partido Comunis-

ta Mexicano (PCM) el cual, con el paso del tiempo fue desarrollando una débil militancia muy concentrada alrededor de las actividades de sus órganos centrales. Dos hechos destacan en este árido periodo. Por un lado se encuentra el respaldo que el PCM le otorgó al movimiento ferrocarrilero de 1958, encabezado por Valentín Campa, y la solidaridad que sus líderes mostraron en repudio a los actos represivos del gobierno mexicano. Por el otro, un segundo hecho que no ha de menospreciarse es el distanciamiento que esta organización trazó para con el Partido Comunista de la Unión Soviética, cuando los rusos invadieron Praga en 1967. En efecto, se trató de un momento clave en las definiciones doctrinarias ya que los comunistas mexicanos se vieron forzados a romper con sus mejores aliados internacionales. Lo importante de este hecho es que ocurrió justamente en los albores del movimiento estudiantil de 1968, el cuál, según el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, fue auspiciado por la Unión Soviética precisamente a través del PCM. Es muy probable que el gobierno mexicano estuviese mal informado y que las complicadas relaciones entre los comunistas de aquí y los del otro lado de la cortina de hierro hayan hecho imposible que este partido estuviera detrás de los estudiantes.

Sin embargo, como secuela de la represión desplegada a partir de 1968, la gran mayoría de los líderes comunistas fueron a parar a las celdas de Lecumberri, prisión política del régimen. Ahí permanecieron enfrentando cargos que a todas luces eran injustificados. El asesinato de varios participantes en aquel movimiento y también la privación de la libertad que muchos de sus líderes enfrentaron, son hechos que subrayaron la distancia que, para finales de los años 1960, existía ya entre el PRI y la izquierda mexicana. En este país no ha habido ningún gobierno más cercano al radicalismo de derecha que el encabezado por Gustavo Díaz Ordaz. Se trata de un hecho paradójico cuando se asume que fue un presidente surgido de las filas de aquel partido que primero tuvo aspiraciones socialistas y que supuestamente jamás renunció a su carácter progresista. Lo cierto es que, el movimiento social de 1968 le arrojó un balde de agua fría a la identidad del PRI. Gracias a él se hizo patente que la defensa de la justicia social había sido insuficiente para disminuir las desigualdades en la sociedad mexicana, y también que el abanderamiento de las libertades democráticas era toda una hipocresía.

Si bien, desde 1938 y hasta 1968, México logró sostener una tasa anual promedio de crecimiento positivamente elevada (alrededor de 7 puntos porcentuales del PIB), en materia de distribución de la riqueza los gobiernos de la revolución fracasaron. En 1965 Pablo González Casanova³ denunció la injusticia estructural del régimen priísta. Éste no había logrado hacer que los beneficios llegaran a manos de la mayoría de la población. En efecto, la burguesía emergente de los tiempos del alemanismo colmó sus aspiraciones —ascender en la escala social— pero como consecuencia de la concentración del ingreso que provocaron sus políticas, se desarrolló un sistema económico inadecuado para promover la justicia social. Al comienzo de su mandato, en 1970, con esta primera conclusión se encontró el presidente Luis Echeverría Álvarez. De la mano de este dilema, el PRI

descubrió también que toda una nueva generación de mexicanos —los nietos de la Revolución de 1910— estaban llegando en números elevados al mercado del trabajo sin contar con la certidumbre de que éste les absorbería. A ello se añadió que un núcleo abultado de estudiantes eran los primeros de cada familia en acceder a la educación superior. Cuando se miran estos hechos desde una perspectiva sociológica, no es difícil entender porqué el movimiento del 68 se articuló alrededor del desafío hacia la autoridad. Había que retar al poder, comenzando por la autoridad del padre que contaba con menos estudios que sus hijos, continuando con las instituciones del régimen que no aseguraban futuro para las nuevas generaciones y concluyendo con la figura presidencial que demostró estar completa y rotundamente sorda frente a lo que estaba ocurriendo con el país. Lo alarmante de este fenómeno es que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz no se haya hecho cargo de esta evidencia. La cual, por cierto, no tuvo una manifestación exclusiva en México. La misma generación que marchó por la avenida Insurgentes y que llegó hasta la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el día 2 de octubre de 1968, fue la que en París y en San Francisco y en Tokio y en tantos otros lugares decidió salir a las calles para desafiar al poder. La sola diferencia fue que en esos otros territorios el Estado entendió la dimensión sociológica del asunto y no se preocupó demasiado por sus secuelas políticas. En San Francisco las autoridades decidieron esperar para que los ánimos se calmaran. En Francia Charles de Gaulle organizó una manifestación por la avenida de los Campos Elíseos para demostrar que los adeptos al régimen eran mucho más que los estudiantes revoltosos. En cambio, en México, el presidente priísta tomó la decisión de acorralar a los estudiantes y de dispararles cobardemente desde las ventanas de los edificios circundantes a la plaza de las Tres Culturas.

Este trágico episodio dejó en claro que el régimen priísta no tenía ya la sensibilidad social que se necesitaba para gobernar en paz los asuntos de una nueva sociedad. La clase media emergente no podía identificarse con la traición a los principios ideológicos del PRI, ni mucho menos con las prácticas violentas y anti democráticas de un régimen que había permanecido prácticamente intocado desde finales de la segunda guerra mundial. No es exagerado advertir que Luis Echeverría tuvo que enfrentar una reforma al régimen que fue de una envergadura similar a la que Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán promovieron durante el episodio revisado anteriormente. Quizá la única diferencia es que Echeverría no modificó los apellidos de su partido para realizarla. Sin embargo, al igual que aquella gran reforma, los dos aspectos que se presentaron como urgentes de resolución tenían también que ver con las contradicciones ideológicas y con las definiciones democráticas. Relativo a las primeras, Luis Echeverría tomó la decisión de regresar a su partido a las geografías de la izquierda social. Ante la necesidad de enfrentar las críticas referentes a la desigualdad, y sobre todo, frente a la urgencia de incorporar al mundo laboral a una nueva generación de jóvenes (*baby boomers*) mejor educados, más sanos y mejor comidos y con muchas expectativas sobre el

futuro de sus vidas, el nuevo gobierno decidió emprender una expansión sin precedentes de la planta laboral: creció las plazas en el aparato burocrático, financió el desarrollo de aquellas empresas que más puestos de trabajo generaban, salvó a varias unidades productivas en quiebra, y así todo un largo etcétera. Esta política se financió a través de empréstitos obtenidos en el exterior a tasas notablemente bajas —debido a la abundancia de recursos petroleros— y a partir de una ampliación del déficit fiscal sin precedentes en el tesoro mexicano. Fue la época del orgullo tercermundista, de las vías alternativas para el desarrollo, del rechazo simultáneo al capitalismo y al comunismo. Fue el regreso a los valores de la revolución, a la idea del frente amplio, a los grandes acuerdos con los obreros y los campesinos, a la política de alianzas internacionales con los países socialistas. El PRI tenía que resolver urgentemente la contradicción ideológica exhibida por el movimiento estudiantil de 1968 y lo hizo aplicando políticas que hoy han sido denominadas como populistas.⁴

Sin embargo, poco hizo Luis Echeverría para la resolución de las contradicciones con respecto a la democracia. En un principio no hubo cambio de política con respecto a las libertades ciudadanas o a los derechos humanos. La violencia del Estado desplegada en 1971 da cuenta de este hecho. También lo hace el surgimiento de las células guerrilleras, fundamentalmente urbanas, que se salieron de todo cauce institucional para enfrentar el autoritarismo del régimen. Es justamente en esta coyuntura de violación a los derechos y de irrupciones de violencia donde comienza a germinar una izquierda política distinta. El brazo represivo del Estado hizo que otros sectores del país, antes más conservadores, simpatizaran con los liderazgos que quedaron encarcelados o reprimidos por el régimen. Y sobre todo, surgió una suerte de empatía por aquellas expresiones de izquierda que no compartían ni la lucha armada, ni los métodos violentos. Algunos de esos liderazgos fueron incorporados aceleradamente al PRI por la vía del ofrecimiento de puestos burocráticos o de cargos de representación proporcional. Sin embargo, otra parte de los hijos del 68 decidió no dejarse cooptar y se fue a refugiar en la academia, sea de las aulas en las universidades públicas, sea en algunos centros de estudios que encontraron financiamiento internacional o del Estado. El PRI se volvió a nutrir de personalidades que le otorgaron de nuevo un costado social y por tanto un refrescado rostro de izquierda, pero al mismo tiempo la izquierda marginal de los años cincuenta y sesenta, después de este episodio, comenzó a crecer a partir de una serie de organizaciones trotskistas, maoístas, socialdemócratas y neo comunistas que más adelante darían origen al Frente Democrático Nacional (FDN).

Seis años después, el dilema democrático cayó en las manos de José López Portillo y, en particular, de su secretario de gobernación, Jesús Reyes Heróles. Ambos diseñaron una política de acercamiento hacia la izquierda no priísta que pudiera, por partida doble, legalizar las actividades políticas de los más moderados —en particular de los liderazgos comunistas antes encarcelados— y también

desactivar a las células guerrilleras que con su actividad habían ya cobrado varias vidas; destacadamente la del importante líder empresarial Eugenio Garza Sada. Esa política se desarrolló fundamentalmente a partir de la reforma electoral de 1976. Ella tuvo entre sus propósitos centrales el otorgamiento del registro al PCM, como partido político nacional, y la ampliación del número de curules que las oposiciones podían obtener por la vía de la representación proporcional. También este gobierno decretó una amnistía para todos aquellos integrantes del movimiento guerrillero que quisieran deponer las armas para hacer política por la vía de los cauces democráticos. Con este conjunto de decisiones, muchas de ellas diseñadas con la participación de los líderes de la oposición, se resolvieron algunas de las contradicciones e inconsistencias más severas del régimen y que fueran exhibidas por el movimiento del 1968.

Desde el análisis de este momento en la historia mexicana es posible detectar, por una parte, el viraje en la identidad ideológica del PRI ocurrido a principios de los años setenta y, por la otra, un robustecimiento de la izquierda no priísta. Gracias a la política de apertura y amnistía emprendidas por Reyes Heróles, el régimen demostró que, aunque lerdo, en los hechos sí podía adaptarse a las demandas de participación democrática de las nuevas expresiones políticas del país. Por su parte, al aceptar la negociación con el Estado para empujar la reforma electoral publicada en 1977, las oposiciones de izquierda hicieron explícito que la revolución del proletariado podía esperar y que preferían la lucha por el poder desde las trincheras democráticas. Es muy probable que, no sólo en el caso del PRI, sino también en el de las oposiciones, el movimiento del 1968 haya cambiado sustancialmente las respectivas valoraciones hacia la violencia. 1977 fue el año en que México apostó nuevamente por la ruta pacífica de las transformaciones.

Identidad ideológica del PRI: ¿último capítulo?

Tal como ocurriera entre 1950 y 1968, las ambigüedades ideológicas del PRI tuvieron un periodo de baja intensidad entre 1970 y 1981. La crisis social provocada por los estudiantes legitimó el viraje en el plano de las ideas. Un consenso alrededor del activo papel que el Estado mexicano había de jugar en la economía se constituyó solidamente entre los priístas. Si en algún momento pude decirse que en México existió la voluntad para edificar un modelo de Estado «benefactor» o «providencia» fue precisamente durante este periodo. Algunos historiadores han querido decir que tal cosa ocurrió a principios de los años treinta, con el presidente Lázaro Cárdenas. Y si bien podrían encontrarse algunos argumentos a favor de tal planteamiento, lo cierto es que esa hipótesis no es sostenible por tres razones: 1) el mandato del General Cárdenas fue demasiado corto como para lograr este propósito; 2) en el mundo entero el Estado benefactor surgió después de la segunda guerra mundial y; 3) a partir de la gestión de Manuel Ávila Camacho las políticas

sociales y económicas del Estado mexicano fueron bastante ortodoxas. Sólo se abandonó el conservadurismo con la llegada de Luis Echeverría Álvarez a la presidencia de la República.

Esta reflexión cobra importancia ya que, cuando en los tiempos presentes se valora —con añoranza o con rechazo— a las políticas del gobierno de la revolución, suele hacerse referencia a todo el periodo en el que el PRI fuera un partido hegemónico. Tal cosa es un grave equívoco. Si bien existen algunos antecedentes destacables, el más pronunciado giro del PRI hacia la izquierda ocurrió después de 1970. Valga hacer aquí la reiteración: entre 1950 y 1970 México siguió una política económica muy prudente y aunque se construyeron algunas instituciones sociales, muy lejos estuvo este régimen de edificar un verdadero Estado benefactor. A diferencia de otros países donde tal cosa sí sucedió, en México no se estableció durante el periodo denominado de «Desarrollo Estabilizador» un sistema universal de pensiones o un seguro general para el desempleo, ni tampoco un sistema de seguridad social que llegara a cubrir a más del 40 % de la población. Tales ambiciones surgieron con posterioridad a la crisis social de 1968 y, sin llegar a materializarse, sólo duraron hasta que finalizara la gestión de José López Portillo.

Es muy probable que las políticas sociales y económicas intensivas en gasto público emprendidas por el gobierno de Luis Echeverría se hubiesen agotado con su mandato. El gasto financiado por un amplio déficit público y por impagables empréstitos internacionales estaba destinado a secarse rápidamente. Sin embargo, un golpe de suerte vino a prolongar el espejismo. Para el segundo lustro de los años setenta México se despertó como una potencia petrolera y entonces los yacimientos de hidrocarburos descubiertos en el sureste mexicano permitieron continuar e incluso reforzar las políticas económicas y sociales echeverristas. Aunque no pudo ser así por mucho tiempo. Hacia principios de los años ochenta comenzó el desplome de los precios internacionales del petróleo y con él, el quebranto de la hacienda pública mexicana. Ahí se acabó toda la estética de las ideas y hubo de trasladarse al gélido estadio de las realidades. Por principio, ya no fue posible seguir manteniendo un aparato burocrático de amplias proporciones, ni tampoco continuar rescatando y manteniendo a una serie de empresas quebradas —aunque proporcionaran innumerables empleos— ni mucho menos hubo cómo mantener las políticas de intensivo gasto público (subsidios, transferencias, financiamiento) que durante los años setenta crecieron exorbitantemente. Para cuando Miguel de la Madrid tomó la presidencia, en 1982, el Estado mexicano estaba ya en números rojos y, en esas condiciones, no quedaba más que recortar al mínimo el gasto y también al aparato gubernamental.

Antes de detenerse a pensar en una nueva muda de principios e ideas políticas, el PRI de Miguel de la Madrid tuvo que ponerse al servicio de la coyuntura. Lo fundamental era evitar que la quiebra se prolongara por la vía de un escalamiento imparable de precios y salarios. Para ello, el Estado mexicano utilizó todos los recursos que tenía a la mano. El único objeto era contener la crisis. Y el instru-

mento político más poderoso para lograrlo fue precisamente el PRI. Gracias a los actores que todavía cohabitaban dentro de dicho partido fue posible pactar con los trabajadores, con los campesinos, con los burócratas y también con los empresarios para constituir un frente solidario contra la debacle económica. La intención era que ellos participaran en la tarea de congelarlo todo: salarios, precios, gasto público, fuga de capitales, etcétera. Se trataba de emprender una acción de gran envergadura que sólo a través las estructuras priístas era posible asegurar. Es muy probable que el éxito del Pacto de Solidaridad Económica haya sido el último momento de la historia mexicana en el que este partido, como frente amplio, pudo ser eficaz. Con dicho esfuerzo político, el PRI agotó lo que le quedaba de su naturaleza original. No es exagerado decir que después de dicho pacto éste partido nunca volvió a ser el mismo: quedó fracturado en su capacidad para aglutinar a todos los factores reales de poder, y por tanto, impedido para seguir ejerciendo de columna vertebral del sistema político mexicano.

El síntoma inequívoco de este hecho fue el surgimiento, desde las propias filas del PRI, de un movimiento político que desafió severamente a la cúpula gobernante. La emergencia del Frente Democrático Nacional (FDN) encabezado por dos hijos predilectos del régimen —como lo fueran Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo— se convirtió en un episodio emblemático que hizo de la acusación sobre las ambigüedades del partido de la Revolución su principal bandera. A Miguel de la Madrid y a todo su equipo se les señaló como tecnócratas incapaces de defender los verdaderos valores progresistas. Se les tachó de *extranjerizantes*, de vendidos al imperio, de ser alfiles de la derecha, en fin, de todo un largo listado de adjetivos que, a la postre, agudizaron las distancias entre las alas liberal y social de ese partido. Con esta tensión comenzó la disputa más feroz que en México se haya dado por la identidad de izquierda. O más precisamente, por la preciada bandera de la Revolución. En efecto, primero con el surgimiento del FDN, y luego con la constitución del PRD, en lugar de haber un aparecieron dos herederos del movimiento revolucionario. La viabilidad y credibilidad de esta fractura priísta se debió, en lo fundamental, a que el FDN se supo engarzar con la corriente de izquierda encabezada por lo que fuera el PCM. Corriente que, si bien no contaba con más del 5 % de la votación conocida, desde finales de los años setenta se había dedicado constantemente a crecer alrededor del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y más adelante dentro del Partido Mexicano Socialista (PMS).

Para finales de los años ochenta ocurrió un momento fundacional para la izquierda mexicana. Gracias a la fusión entre la facción escindida del PRI y la masa crítica de izquierdas opositoras al régimen confederadas alrededor del PMS, la historia de la pluralidad política en México cambió de fisonomía. La década de los noventa abrió con un nuevo referente que era capaz de enfrentar al partido hegemónico desde sus argumentos más preciados. Los recién estrenados adversarios del PRI comenzaron a señalarle como un partido oportunista y sin identidad,

o más rudamente, como un partido siempre dispuesto a contemporizar con la derecha. En revancha, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hizo todo lo posible para que el movimiento neocardenista abortara. Buscó cooptar a sus líderes, quiso arrebatárle a su base social, abusó de los recursos del erario para dismantelarles, y se dice, fue represor, asesino y violento con los fundadores del PRD. De regreso, el naciente PRD se dispuso a crecer a costa del partido hegemónico. Región por región del país fue arrebatándole cuadros que vieron en el coqueteo con esa nueva fuerza partidaria una gran oportunidad para hacer crecer sus carreras políticas. Describir la larga saga de la disputa entre los dos partidos revolucionarios necesitaría de un esfuerzo reflexivo que por mucho excede las pretensiones de estas líneas. Sin embargo, vale la pena apuntar que, con velocidades distintas e intensidades desiguales, la batalla se libró férreamente, durante cerca de tres lustros, tanto a nivel nacional como en el ámbito de las localidades.

Esta pugna por la herencia de la Revolución vivió uno de sus capítulos más álgidos, y quizá definitivos, durante la última elección presidencial del año 2006. Para ponderar la validez de esta afirmación, valga observar detenidamente la transformación del discurso priísta a lo largo de esta contienda. El candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo Pintado —quien comenzara su campaña con la defensa tradicional de las luchas del pueblo y las demandas de los sectores populares— se vio forzado a cambiar los términos de su discurso ante los magros resultados de su eficacia retórica. Con ese propósito se mudó a las vecindades del centro político y desde ahí hizo un desesperado llamado a los electores para que rechazaran a los extremos. «Ni, ni», podría haber sido el lema de su campaña: ni la derecha neoliberal y conservadora, ni la izquierda radical y polarizante. Pero esa estrategia también fracasó. Más allá de complacer al voto duro del priísmo, Roberto Madrazo extravió a una buena parte de los electores de su partido que, en el momento, vieron como más nítidamente de izquierda a la oferta perredista, y como más puramente de derecha, a la oferta del Partido Acción Nacional (PAN). De un flanco y del otro el PRI se quedó sin alas para volar hacia la silla presidencial. En el 2006 este partido cayó al tercer lugar de las preferencias electorales, entre otras razones, como consecuencia de su adicción a la ambigüedad.

Con dicho episodio electoral la bandera social pasó claramente a manos de la corriente política de izquierda encabezada por el PRD. En el futuro será muy difícil que el PRI recupere esa parte de su identidad. Otros sucesos y cosas, en su mayoría ajenas a su voluntad, habrían necesariamente de ocurrir para que los rasgos de la izquierda progresista regresasen a formar parte de su constitución. Quizá esta sea la gran diferencia entre el viejo y el nuevo PRI. En el pasado ese partido tenía la forma de una inmensa bisagra que abría y cerraba la pesadísima puerta del sistema político mexicano. Una bisagra como de vieja hacienda virreinal que era capaz de abarcar a una gran parte del espectro ideológico. Ahora el PRI, más por azar que por mérito, sigue siendo la bisagra del sistema político mexicano; pero se trata de una pequeña bisagra, una juntura moderada que ya no alcanza a ocultar las

grandes diferencias que subsisten en este país en el plano de las ideas. De ahí que tan poco éxito tengan ahora sus llamados al consenso y a la unidad. El mexicano, después de tantos años de priato, terminó cansado de su movimiento pendular. Esto no quiere decir que este partido esté condenado a desaparecer. Sólo que —víctima de su ambivalente naturaleza— perdió el lugar privilegiado que durante tantos años ocupó en la historia mexicana.

La contradicción democrática de la izquierda contemporánea

El nacimiento del FDN en 1987 no sólo puso en cuestión el asunto de la identidad ideológica de las expresiones de izquierda, sino que también exhibió las contradicciones de este espectro político para con los valores de la democracia. Fue un poderoso dardo que golpeó en el centro de dos tableros. Una vez que ha sido abordada la cuestión de la identidad ideológica, lo que sigue es explorar el derrotero experimentado por la izquierda en torno al tema democrático. Particularmente después de que el FDN participara en aquellas elecciones de 1988, donde se evidenció que el sistema político de partido hegemónico ya no era sostenible para México. Quizá uno de los errores más graves que cometiera Miguel de la Madrid durante su administración fue subestimar las repercusiones del reto que Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo le impusieron a su partido. Ni Jorge de la Vega Domínguez, presidente del PRI en aquella época, ni de la Madrid alcanzaron a calcular las enormes consecuencias que tendría su respectiva intolerancia para con estos disidentes; de lo contrario hubiesen administrado mejor su flamígera espada. Por lo pronto no les habrían echado de las filas tricolores con cajas destempladas cuando éstos exigieron, en 1987, democratizar el proceso de selección del candidato presidencial. Lo destacable del asunto es que, antes de hacer ningún planteamiento de carácter ideológico, los líderes del FDN emplazaron al PRI para que diera un paso más en su proceso de institucionalización. Sin embargo, a diferencia de otros momentos, en esta ocasión la reforma propuesta no venía de la cúpula dirigente sino de sus segundas y terceras filas. Es innegable que la expulsión de Cuauhtémoc Cárdenas —hijo del prestigiadísimo ex presidente de los años treinta— fue el hecho más notable de este episodio. Sin embargo, a esta cuestión se añadieron dos más de igual relevancia. Por una parte, desde la crisis de 1982 se había acumulado una severa crítica, tanto a las arbitrarias decisiones de José López Portillo —muy destacadamente la nacionalización de la banca— como a las soluciones sin consenso que la administración de Miguel de la Madrid echó a andar para enfrentar la crisis económica. Por otra parte, desde la trinchera de la izquierda no institucional era evidente la carencia de un líder político que contara con raíces sociales tan sólidas como para hacer que el árbol de la oposición progresista fuese capaz de resistir ante los poderosos vientos del régimen. Es cierto que, dentro del PMS, se tenía ya pactada la candidatura a la presidencia de Heberto Castillo, para

que éste contendiera en las elecciones de 1988. Sin embargo, no se trataba de una personalidad que fuese lo suficientemente creíble como para disputar realmente el más alto cargo de la nación. Su historia y su perfil le situaban más cerca de una candidatura testimonial, similar a tantas otras que la izquierda opositora había presentado antes. En cambio, tanto por su origen familiar como por su reciente experiencia administrativa como gobernador del estado de Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas resultaba ser una figura poderosamente verosímil para desafiar al partido de la Revolución. Tal cosa fue prevista con toda nitidez por el estratega del FDN, Porfirio Muñoz Ledo, y también por una gran mayoría de los líderes de la izquierda no priísta que poco a poco se fueron sumando a este nuevo polo político.

Una paradoja para el naciente PRD fue que su reclamo democrático hacia el régimen no se tradujera automáticamente en un ejercicio democratizante para consigo mismo. Como ya antes se anotara, la democracia funcional que caracterizó al PRI nunca consideró al ciudadano como una pieza central de su construcción. Los derechos de la persona —del militante, del dirigente o del ciudadano común y corriente— no estuvieron presentes en las preocupaciones de ese partido. De ahí que su vida institucional estuviese orquestada a partir de corporaciones: organizaciones, sectores, camarillas, corrientes ideológicas o generacionales, etcétera. En efecto, la única manera de entrar al PRI y de crecer dentro de él pasaba por la necesaria pertenencia a un grupo político que, organizado por una férrea disciplina jerárquica, tenía como misión administrar la carrera profesional de sus integrantes. No sorprende en este sentido el uso, entre los priístas, del término «familia revolucionaria». En efecto, hasta hace pocos lustros, en México la institución familiar hacía referencia a una organización solidaria donde la figura paterna era la máxima autoridad mientras que los hijos y demás integrantes debían respetar, disciplinarse e incluso subordinarse a las tradiciones provenientes de mucho tiempo atrás.

Lo destacable de este planteamiento es que cuando el PRD surgió a la vida pública mexicana para retar al régimen del partido hegemónico, no cuestionara al mismo tiempo el basamento cultural, ni las prácticas esencialmente autoritarias de éste. Dos elementos dan prueba de ello. Muy pronto la figura de Cuauhtémoc Cárdenas se erigió como un liderazgo incuestionable —una suerte de gran padre de la nueva izquierda mexicana— frente al cual, si se estaba en este partido, era aniquilador oponerse. Se trató de la réplica al viejo vicio del PRI donde al presidente de la República se le solía rendir un inopinado culto. Luego, el otro rasgo trasladado directamente de la práctica priísta fue la manera en que el PRD organizó su vida política interna. Fueron nuevamente las corporaciones —pertinentemente llamadas «tribus»— las que constituyeron el mapa de navegación política dentro de esta instancia. En efecto, hoy en día el acceso y avance en los cargos políticos del PRD depende esencialmente de la tribu (o camarilla) a la que el militante pertenece, mucho más que a los méritos personales. Así como ocurrió en los tiempos fundacionales del PRI, el PRD del presente no ha sabido constituirse como un partido integrado por ciudadanos que poseen derechos y obligaciones y

formado por ciudadanos que merecen libertad y respeto a sus opiniones. En los hechos lo que importa en la vida interna de este partido el amalgama de corrientes políticas que generalmente actúan obedeciendo a sus respectivos liderazgos. Al definirse como partido de masas, y no de militantes, el PRD renunció a poner al ciudadano como su unidad básica y prefirió dejar en manos de sus pocos liderazgos —todos ellos recargados en y sobre sus disciplinadas tribus— el desarrollo de la acción política para con el resto del sistema político. Las muchas personalidades que llegaron a este partido desde las diversas historias fraguadas en la izquierda no priísta, se fueron adaptando a este modelo de organización y de toma de decisiones. Destacan, sin embargo, quienes venidos desde esas filas, no estuvieron de acuerdo con el modelo autoritario de relación entre militantes y se vieron por tanto forzados a abandonar al PRD durante su primera década de vida. Entre otras, aún se recuerdan las renunciaciones de José Woldenberg, Adolfo Sánchez Rebolledo o Gilberto Rincón Gallardo, y también la de uno de sus fundadores más importantes: Porfirio Muñoz Ledo.

Con respecto al tema de la democracia, la vida interna del PRD ha cambiado muy poco en los primeros años del siglo XXI. Las tribus siguen siendo el instrumento central de gobierno en el PRD y la cúpula partidista continúa poseyendo un amplio margen de sujeción sobre el resto de los militantes. La sola diferencia radica en que, desde el año 2000, Cuauhtémoc Cárdenas se vio forzado a abandonar su plaza como dirigente máximo del PRD para cedérsela al tabasqueño Andrés Manuel López Obrador. Con este segundo liderazgo, la tradición autoritaria y caudillista de ese partido ha tendido a consolidarse. Sorprende que en una época donde la democracia mexicana ha ganado tanto terreno, inclusive en la vida interna del PRI, los valores y las prácticas entre los perredistas continúen siendo tan antiguos. Nuevamente aquí se refleja la ambivalencia de la izquierda mexicana a la que reiteradamente se ha hecho mención en este texto. De un lado, la izquierda perredista se presenta a sí misma como un instrumento para luchar por la democratización del país y, del otro, ella no ha sido capaz de construirse a sí misma como una fuerza partidaria satisfactoriamente democrática. Es decir, como un sistema institucional que posea pesos y contrapesos, donde las decisiones se tomen entre militantes que guardan iguales derechos y obligaciones, y donde la entrada y el avance dentro de las filas del partido no ocurra a través de las diversas tribus dominantes, sino a partir de los méritos políticos de cada persona.

Esta ambigüedad vivida dentro del el PRD no es la única que se percibe y tampoco es la más conocida. Hacia fuera este partido también ha sido ambivalente para con el tema de la legalidad democrática del sistema político mexicano. Como parte final de este apartado vale la pena explorar el tema. La democracia moderna tiene como piedra de toque el respeto a los mandatos y procedimientos fijados por la ley. Esto no quiere decir que este régimen sacralice a la legalidad. Lo único que establece es que, para transformar al orden jurídico ha de cuidarse que los procedimientos sigan una ruta no violenta, y por tanto incremental, de reformas a la ley.

Nada de extraordinario tiene que la izquierda suela desafiar a la legalidad cuando ésta es injusta. Tampoco es recriminable que dicha corriente política quiera igualar las consideraciones de la ley y del Estado para con los ciudadanos. Está en su naturaleza ideológica actuar a favor de la equidad en las condiciones de vida y para con el ejercicio de las libertades. De ahí que sea completamente legítimo el desafío que sistemáticamente ha hecho el PRD hacia la legalidad mexicana.

Particular atención a este respecto merece el discurso que Andrés Manuel López Obrador desarrolló a lo largo de su campaña presidencial del año 2006. La pieza central de su estrategia de proselitismo fue el ataque a los privilegiados. La palabra privilegiado —*privi-lege* (privado de la ley)— es enormemente poderosa para describir el estado que guarda la legalidad en México. En este país, seis de cada diez ciudadanos asumen que las leyes sólo se utilizan para defender los intereses de la gente con poder.⁵ Alrededor del mismo porcentaje advierte recibir un trato poco justo por parte de las autoridades y cinco de cada diez personas están convencidas de que sólo las autoridades violan la ley.⁶ En efecto, en la sociedad mexicana existe un amplio consenso alrededor de la injusticia de la justicia, o más precisamente, de las injustas asimetrías en el trato que la gran mayoría de los mexicanos enfrentan cotidianamente por parte del Estado y también de los poderes fácticos. En México, privados de la ley están los más poderosos y también los desposeídos. Mientras los primeros abusan de la impunidad que su posición les ofrece, los segundos padecen la desprotección en que les deja el abandono del imperio de lo jurídico. De ahí que la legalidad haya sido sometida a juicio por una buena parte del electorado, y de ahí también que Andrés Manuel López Obrador haya hecho del ataque a los privilegiados, y también hacia las injustas instituciones del Estado, las banderas más sonoras de su campaña.

Sin embargo, en toda democracia existe una frontera entre proponerse como el reformador de la legalidad injusta y plantarse como quien va a derrumbar dicha legalidad. Esta es la frontera que el PRD suele cruzar de ida y de vuelta sin percibir la diferencia. Una cosa es combatir las fracturas y defectos de la ley y otra muy diferente es querer derrocarla. Lo primero tiene todo que ver con la democracia, lo segundo no. Y ésta es la ambigüedad más evidente de la izquierda mexicana contemporánea. La que le lleva a suponer que es la revolución y no la reforma lo que puede hacer que las cosas cambien en un régimen democrático. Es muy probable que haya sido precisamente esta confusión en el lenguaje del PRD lo que, en los hechos, condujo a Andrés Manuel López Obrador a perder la presidencia de la República el año pasado. Véase de cerca las cosas. Si bien más de dos terceras partes de los mexicanos suelen cuestionar el entramado de leyes e instituciones que conforman a la legalidad del Estado mexicano, sólo el 12 % está dispuesto a desafiarle. En cambio, aproximadamente el 60 % de los mexicanos prefiere transformarle por la vía de los jueces y tribunales o por el camino de las reformas legislativas.⁷ Este dato es de lo más relevante. Mientras una gran parte de la población pudo, en efecto, sentirse identificada por el discurso de la izquierda mexicana

en las pasadas elecciones —en cuanto a la desigualdad que los mexicanos padecen— en su gran mayoría no compartió el desconocimiento que Andrés Manuel López Obrador hiciera del proceso y los resultados electorales. En septiembre de 2006, dos meses después de la jornada electoral, mientras el 70 % de la población estuvo de acuerdo con la validación que el Tribunal Electoral hizo del triunfo de Felipe Calderón, 54 % de la población mexicana se hizo de una opinión adversa sobre la resistencia civil emprendida por este ex candidato perredista. Y en el mismo sentido, una mayoría muy amplia se volvió extremadamente crítica con la extravagante figura de la «presidencia legítima».⁸

En la contienda de 2006 se pueden encontrar varios de los rasgos más interesantes sobre el argumento defendido en este texto. La izquierda mexicana no ha logrado deshacerse de su ambigüedad para con los procedimientos y las prácticas de la democracia. No pudo hacerlo desde adentro y tampoco lo ha logrado hacer hacia fuera. En el 2006 dentro del PRD volvió a escucharse una sola voz: la de Andrés Manuel López Obrador. Y también las tribus políticas fueron las únicas que definieron las candidaturas que este partido presentó para el parlamento. Pero, por sobre todas las contradicciones, lo que más resaltó fueron las ambigüedades para con los valores y la legalidad de la democracia. En concreto, la izquierda condicionó la aceptación de los resultados a la eventualidad de que fuera su candidato presidencial quien ganara la contienda. Como en su momento lo hiciera Cuauhtémoc Cárdenas, a lo largo de todo el año pasado, Andrés Manuel López Obrador dijo de una u otra forma: la democracia soy yo. Fue precisamente este confusísimo discurso el que generó enormes desconfianzas hacia este contendiente. La pérdida de 15 puntos porcentuales que López Obrador traía —hacia principios del año 2006— por encima de su adversario más cercano, el candidato de la derecha Felipe Calderón Hinojosa, sólo puede explicarse por una razón: la desconfianza que surgió entre los electores. Es muy cierto que sus adversarios ayudaron enormemente a que tal desconfianza se gestara. Ellos echaron a andar una muy alevosa campaña de miedo. Sin embargo, resulta necesario decir también que, ni el candidato de la izquierda ni su partido ayudaron para desmentir a quienes afirmaban lo peligroso que sería para la democracia mexicana el que un sujeto desleal con la legalidad democrática llegase a la presidencia. Lo peor para la reciente historia de la izquierda mexicana es que, quienes en su momento no le creyeron a la publicidad de la derecha, después de que Andrés Manuel López Obrador optara por desconocer la voluntad de las mayorías, se vieron forzados a concederle la razón.

Conclusiones

Este texto tuvo como objetivo demostrar que, contra lo que comúnmente se presupone, los partidos que intentan cazarlo todo —los llamados *catch all parties*— tienden a pagar elevados costos por sus ambigüedades. El argumento que se opone a esta

extendida idea que defiende a la ambivalencia como virtud de la política, no viene de ninguna teoría filosófica o moral, sino de la teoría de la elección racional que tanto veneran quienes practican las ciencias políticas o la economía política. Se basa en la idea de que los ciudadanos tenderán a apreciar aquella opción que les haga pagar menos costos (tiempo, dinero, atención) para informarse. Se puede afirmar que una opción política tendrá ventaja competitiva sobre otra si es capaz de reducir al mínimo los costos de información que son necesarios pagar para descifrar su oferta. Desde luego que también la nitidez puede acarrearle costos. Si el ciudadano no comparte la propuesta de la fuerza política en cuestión, éste se alejará más rápido de lo que lo habría hecho en una circunstancia de confusión. Sin embargo, es premisa de este texto que, en un contexto democrático —donde la competencia entre varias opciones es un elemento constante— resulta materialmente imposible prolongar la ambigüedad. Si en un tiempo razonable la oferta política en cuestión no logra presentar claramente sus propuestas, sus respectivos adversarios se encargarán de despejar las dudas. Véase de la siguiente manera: en un ambiente de competencia electoral, toda oferta política está obligada a realizar una narración. Aquella que gane mayor número de adeptos será la que logre comunicar mejor su propia historia. En cambio, la oferta política derrotada tenderá a ser aquella donde fueron los adversarios quienes escribieron la página final de dicha narración.⁹ Es precisamente por ello que la consistencia y la coherencia han de ser consideradas, no como defectos, sino como virtudes para la lucha por el poder en un contexto de pluralidad.

En un principio se afirmó aquí que, en un régimen autoritario, las ambigüedades y ambivalencias de una organización política podían ser consideradas como poco relevantes. En efecto, si no hay competencia entre ofertas políticas, ¿para qué molestarse por las definiciones? Sin embargo, como el desarrollo de este texto demuestra, ninguna ambigüedad está destinada a permanecer indefinidamente en el tiempo. Por lo pronto, las mutaciones experimentadas por el partido hegemónico que gobernara México durante la mayor parte del siglo XX así lo demuestran. En efecto, dan prueba de ello la transformación que sufrió el PRM para convertirse en PRI, o las que este mismo partido vivió después de la crisis social provocada por el movimiento de 1968, o por la crisis económica de principios de los años ochenta. Una hipótesis conclusiva a este respecto podría ser que los sistemas autoritarios retrasan las consecuencias que la ambigüedad puede acarrear, pero no les eliminan. Siempre llegará el momento en que la ambivalencia haya de ser enfrentada. Ahora bien, regresando al planteamiento original, si una fuerza política se encuentra dentro de un escenario competido, las consecuencias de las ambigüedades no se dejarán esperar. La fuerza política en cuestión perderá ventajas frente a otras que sí posean definiciones nítidas que ofrecer, y muy probablemente perderá también la carrera hacia el poder.

Siguiendo estas reflexiones es posible retirar una primera lección para las izquierdas mexicanas. Sobre todo si se observa con detenimiento el derrotero que ellas recorrieron en la pasada elección presidencial del 2006. Como se anotara anterior-

mente, el centrismo del PRI acabó costándole muy caro. Fueron otras opciones mejor definidas en el plano de su identidad ideológica las que lograron arrebatarle el lugar que antes ocupara. Entre otras variables, la ausencia de contornos claros y su política del «ni, ni» le llevaron a convertirse en la tercera fuerza política de este país. Con respecto al PRD, es conveniente insistir en que, desde el plano de la alineación ideológica, este partido logró comunicar muy bien su mensaje. Pudo hacer que se le identificara como una fuerza de izquierda que está comprometida con los desposeídos. Ha de insistirse en que, gracias a la solidez en su discurso, en esta última elección el PRD le arrebató la totalidad de la bandera social al PRI.

Sin embargo, es necesario concluir también que esta nueva izquierda mexicana padece un severo rezago en la solución de su otra ambigüedad; la que tiene que ver con los principios, los procedimientos y las legalidades de la democracia. Y es muy probable que haya sido precisamente tal indefinición la que terminó pesando en el ánimo de los mexicanos cuando ellos acudieron a las urnas en aquel mes de julio del 2006. Andrés Manuel López Obrador perdió la presidencia porque sus adversarios escribieron la historia que él estaba llamado a contar. Gracias a la ambivalencia que prodigó, convencieron de su peligrosidad martilleando con la idea de que su llegada a la presidencia de la República implicaría un retroceso para el país. Lo paradójico de esta historia es que la narración de los adversarios contó con la participación y complicidad del agraviado. Ocurrió así durante los últimos meses de su campaña y, sobre todo, con posterioridad a la elección presidencial. La negativa de Andrés Manuel López Obrador para aceptar los resultados arrojados por las urnas terminó convirtiéndose en un epílogo muy negativo para el capítulo más reciente de la historia de la izquierda mexicana.

Si en el futuro el PRD resuelve sus contradicciones de una manera distinta a cómo lo hizo este fatídico año, es muy probable que dicha fuerza política termine consolidándose como el referente más sólido de la izquierda mexicana. En sentido inverso, si los partidarios de la revolución democrática no toman conciencia de los costos que les ha dejado apostar ambivalentemente —unas veces por las creencias de la democracia y otras por el discurso de la revolución— con toda seguridad, antes de que llegue la próxima elección presidencial, terminarán perdiendo toda credibilidad. De ocurrir así las cosas, el Partido Revolucionario Institucional volverá a tener la oportunidad que necesita para recuperar su arrebatada identidad y con ella, el lugar privilegiado en la estructura de poder que, también, recientemente extraviara.

NOTAS

1. Ver Mainwaring Scott y Tomothy R. Scully (1995), *Building Democratic Transitions: Party Systems in Latin America*. Ed., Sannford University Press. California, Estados Unidos, pp. 6-28 y 122-137.

2. Ver Medina Peña (1994), *Hacia un nuevo Estado, México, 1920-1993*. Fondo de Cultura Económica. México, pp. 146-168.

3. Ver Pablo González Casanova (1995), *La democracia en México*, Editorial Era, México D.F.
4. Ver Carlos Santiago Bazdresch Levy (1991), *Populism and Economic Policy in Mexico, 1970-1982*, en Rudiger Dornbush y Sebastián Edwards, *The Macroeconomics of Populism in Latin America*. The University of Chicago Press. Illinois, Estados Unidos, pp. 223-262.
5. Secretaría de Gobernación (2006), *Tercera Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas ENCUP*, México.
6. IFE-IISUNAM (2004), *Encuesta la Naturaleza del Compromiso Cívico: Capital Social y Cultura Política en México*. (Archivo Electrónico). Documento interno del IFE, México.
7. *Ibidem*.
8. Parametría (2006), *Reporte Evaluación del Instituto Federal Electoral: Junio-Septiembre de 2006*. Documento interno del IFE, México.
9. Ver Halperin Mark y John Harris (2006), *The Way to Win: Taking the White House in 2008*. Random-House, Estados Unidos de América.

BIBLIOGRAFÍA

- BAZDRESCH, Carlos y Santiago LEVY (1991), *Populism and Economic Policy in Mexico, 1970-1982*, en Rudiger Dornbush y Sebastián Edwards, *The Macroeconomics of Populism in Latin America*. The University of Chicago Press. Illinois, Estados Unidos de América, pp. 223-262.
- GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo (1995), *La democracia en México*, Editorial Era, México D.F.
- GONZÁLEZ COMPEÁN, Miguel y Leonardo LOMELÍ (2000), *El Partido de la Revolución. Institución y Conflicto (1928-1999)*, Fondo de Cultura Económica, México D.F.
- HALPERIN, Mark y John HARRIS (2006), *The Way to Win: Taking the White House in 2008*, Random-House, Estados Unidos de América.
- IFE-IISUNAM (2004), *Encuesta la Naturaleza del Compromiso Cívico: Capital Social y Cultura Política en México*. (Archivo Electrónico). Documento interno del IFE, México.
- MAINWARING, Scott y Tomothy R. SCULLY (1995), *Building Democratic Transitions: Party Systems in Latin America*. Ed., Sannford University Press, California, Estados Unidos de América, pp. 6-28 y 122-137.
- MEDINA, Peña (1994), *Hacia un nuevo Estado. México, 1920-1993*. Fondo de Cultura Económica, México, pp. 146-168.
- PARAMETRÍA (2006), *Reporte Evaluación del Instituto Federal Electoral: junio-septiembre de 2006*. Documento interno del IFE, México.
- SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (2006), *Tercera Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas ENCUP*, México.

Ricardo Raphael es Licenciado en Derecho por la UNAM, Maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Maestro en Administración Pública por la Escuela Nacional de Administración (ENA) de la República Francesa y tiene estudios doctorales en Economía Política y Políticas Comparadas por la Escuela para Graduados de Claremont, California. Fue secretario general de Democracia Social, Partido Político Nacional y representante ante el Consejo General del IFE del partido México Posible. Es integrante de la mesa editorial de la revista «Nexos».